¿ GUADALAJARA CIUDAD AMABLE, O METROPOLI REGIONAL?

Alberto Leonel de Cervantes*

Sentimentality about nature
denatures everything it touches.
Jane Jacobs

"Guadalajara, Ciudad Amable" reza el *slogan* promocional adoptado por la pasada administración municipal de la capital de Jalisco. En grandes carteles, estratégicamente ubicados dentro y fuera de la ciudad, en mensajes insistentemente difundidos por todos los medios masivos de comunicación, el atractivo título otorgado ahora a la ya célebre Perla Tapatía sugiere algo más que simple y chabacanero orgullo localista. Acuñado en tiempos de creciente violencia social y deterioro ambiental, el nuevo título resume la demanda colectiva por el rescate de una especie de paraíso perdido, que en el transcurso de tan sólo unas décadas parece irremediablemente condenado a convertirse en una más de esas llamadas junglas de asfalto, marca y sello de las sociedades modernas.

En el relevo generacional de la sociedad tapatía aún suenan muy claras las voces de aquellos que conocieron la ciudad señorial de las grandes casonas y las calles empedradas, en donde la tranquilidad cotidiana sólo era interrumpida por la competencia de bocinazos entre los conductores de los vehículos que reclamaban la preferencia en el cruce de alguna calle.[1] Ciudad amable era aquella, sin duda, y nadie que la haya disfrutado podrá fácilmente resignarse a perderla para siempre en el tiempo. Por ello el *slogan*, más que de presunción, tiene resonancia de reclamo.

* Arquitecto, especializado en Administración de Procesos de Planeación en el M.I.T. Ex-profesor de la Escuela de Arquitectura del ITESO.

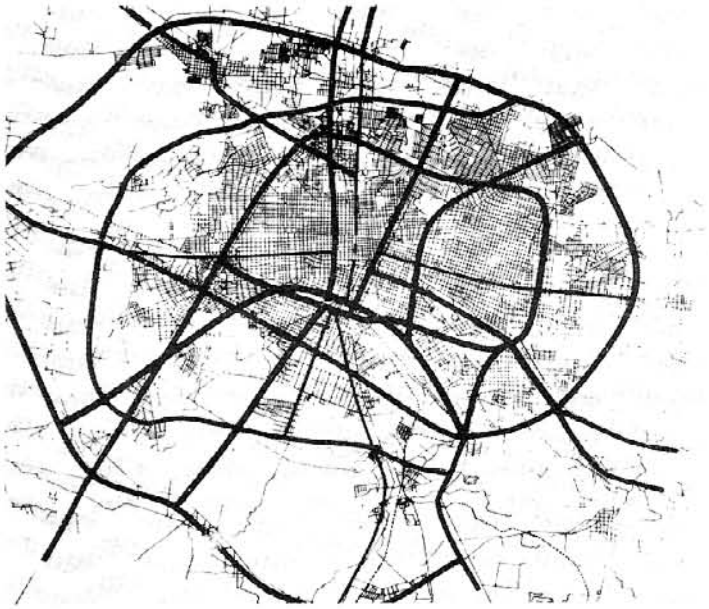
El crecimiento y el cambio son tema permanente de interés público. La investigación, la encuesta o el reportaje sobre el tema, ocupan parte importante del espacio gráfico de las publicaciones diarias o del tiempo de las radioemisoras locales. El malestar o la preocupación son casi unánimes entre los sectores de la población con capacidad de manifestar su opinión. Podría decirse, sin temor a exagerar, que la demanda general supone, para empezar, la suspensión inmediata del crecimiento de la ciudad y del número de sus pobladores y, de ser posible, la disminución de las cifras alcanzadas a la fecha en estos aspectos.

Pero es obvio que no es tan sólo un problema de escala. El reclamo social no contiene únicamente consideraciones cuantitativas, por el contrario, la pretensión es devolver a la ciudad una calidad de vida que conlleve la supresión de toda forma de contaminación o degradación del ambiente urbano: humos, gases, polvos, ruidos, embotellamiento de vehículos. Igualmente, o tal vez con mayor vehemencia, la demanda es por una convivencia libre de ese confuso cuadro de patología social en el cual destacan víctimas y victimarios del sistema: tragafuegos, saltimbanquis y limpiavidrios en cada esquina; narcotraficantes, ex-judiciales, robabancos y empistolados de toda laya, adueñados de la ciudad. Guadalajara, Ciudad Amable, reclama el *slogan* municipal. En el pecado va la penitencia, sentencia el antiguo refrán popular.

Los síntomas que presenta el desenvolvimiento alcanzado por la Guadalajara de los años ochenta nos muestran el producto de cuatro siglos de crecimiento firme y seguro, pero de ritmo lento, seguidos de cuatro décadas de expansión audaz y acelerada pero sin objetivos claros; fenómeno, ese, que se diagnostica reiteradamente y con suficiente claridad en inumerables investigaciones y documentos producidos tanto por el medio académico como por las instituciones oficiales, especialmente en el transcurso de la última década, y en los cuales se puede apreciar el comportamiento seguido por los grupos económicos locales, aprovechando las condiciones tanto nacionales como internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial, para privilegiar la consolidación de las actividades industriales, comerciales y turísticas, en detrimento de las agropecuarias, forestales y pesqueras.

Las migraciones casi masivas del campo de la ciudad, las facilidades al capital foráneo y al doméstico para la instalación de industrias con procesos de alto potencial contaminador, tanto dentro de la ciudad como en las periferias inmediatas; la capitulación del comercio mayorista local ante las corporaciones nacionales de supertiendas; la puesta

en práctica de una jugosa operación inmobiliaria que a lo largo de diez años permitió que los frutos del narcotráfico cristalizaran en espléndidas residencias en los mejores rumbos de la ciudad, son, entre otros, los nuevos razgos del fenómeno urbano, que van desdibujando gradualmente las imágenes de la Guadalajara de principios de siglo. Y todo esto, es claro, agravado en los últimos tres años por los efectos sociales de la crisis económica que agobia al país, y que tiene efectos directos en la calidad del ambiente y en las conductas sociales de los grupos más afectados.



En tan sólo 13 años y unos meses estaremos en el casi mitológico año 2000. En esos días la ciudad de Guadalajara cubrirá una superficie cercana a las 40,000 hectáreas, o sea casi la totalidad del Valle de Atemajac, desde el pie de la Serranía de la Primavera, al poniente, hasta los bordes de la Barranca de Oblatos en el oriente, y desde el Periférico, al sur, hasta el límite norte de la cuenca del río San Juan de Dios, además del desbordamiento que habrá de continuar avanzando a ambos lados de las carreteras hacia Nogales, Morelia, México y Chapala; en este último caso, extendiéndose casi sin solución de continuidad hasta las áreas industriales de El Castillo y las poblaciones de El Salto y Juanacatlán. Esto supondrá la urbanización de la totalidad del municipio de Guadalajara, toda el área que del Valle de Atemajac le corresponde al municipio de Zapopan —aumentando con ello la presión especulativa sobre las áreas agrícolas de Tesistán, en cuyo asedio arriesgarán sendos caballos de Troya los traficantes de tierra agraria y algunos promotores particulares. El municipio de Tonalá verá desaparecer la casi totalidad de sus áreas agrícolas y el de Tlaquepaque será un municipio mayoritariamente urbano.

Una población cercana a los seis millones de habitantes ocupará esa enorme ciudad, que seguirá siendo, por amplio margen, la segunda concentración urbana del país, y para el desplazamiento de personas y de bienes, más de 700 mil vehículos de todos tipos rodarán por las calles de Guadalajara, volviendo más lento y conflictivo el tránsito y aportando una fuerte carga de contaminantes a la atmósfera, no obstante que para esas fechas los combustibles en uso seguramente serán de especificaciones mejoradas y que los 13 años parecen un plazo más que razonable para que la industria automotriz nacional no solamente supere sus propias especificaciones de diseño y fabricación de vehículos sino, también, para que introduzca al mercado partes y componentes adaptables a los vehículos actuales —muchos de los cuales aún estarán en servicio para entonces—, para aumentar y mejorar la combustión y disminuir las emisiones por los escapes.

Más difícil resulta estimar los perfiles cuantitativos y cualitativos que la actividad industrial tendrá en los mismos plazos considerados. El ingreso de México al GATT, la creciente demanda social para un mejor control ambiental, y por lo tanto por una tecnología menos contaminante, aunados a la profunda crisis económica que enfrenta actualmente este sector de la economía, limitan la posibilidad de hacer proyecciones a mediano y largo plazos en esta manteria, pero puede suponerse, con razonable margen de seguridad, que dentro del Valle de Atemajac continuará la consolidación de industrias pequeñas y medianas con bajos niveles de emisión de humos, gases y polvos, en tanto que la gran industria encontrará ventajas comparativas fuera de la concentración urbana, principalmente en los municipios de El Salto y Poncitlán.

Dentro de ese panorama previsible, tal vez el razgo más crítico que alcanza claramente a vislumbrarse, sin necesidad de una esfera de adivino, es el de la vivienda de los pobres, que sin lugar a duda constituirán la enorme mayoría. Tan sólo por crecimiento demográfico —esto es, sin considerar déficit actual ni reposición de viviendas en malas condiciones— será necesario que casi 450 mil nuevas familias encuentren en donde vivir, lo que supone un crecimiento anual de más de 31 mil viviendas, mas la necesaria construcción de infraestructuras de vialidad, agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado público para cerca de mil hectáreas cada año. Si comparamos esta demanda contra el comportamiento de la oferta actual, tanto por parte del sector privado inmobiliario —que únicamente atiende a la población de niveles económicos medios y altos— como de las instituciones públicas —que en

Jalisco aún no representan competencia en el mercado para los traficantes de tierra ejidal—, es fácil prever un proceso espontáneo y anárquico de marginalidad creciente en las áreas de vivienda de los grupos de menores ingresos, ocupando mayoritariamente las miles de hectáreas de tierra ejidal que aún se encuentran dentro de las zonas de reserva de crecimiento del Area Metropolitana de Guadalajara, en los municipios de Tonalá y Zapopan, principalmente.

El abastecimiento de agua potable ha constituido uno de los temas más polémicos en el escenario de la evaluación de alternativas y de toma de decisiones en Guadalajara a lo largo de más de dos décadas. Sin embargo, diría Perogrullo que no hay más agua que la que hay, por lo que es lógico pensar, que, si ya se han tomado algunas decisiones importantes que implican la máxima extracción admisible al Lago de Chapala, al río Santiago y a los acuíferos subterráneos de Atemajac-Tesistán, dentro del plazo de poco más de diez años al que nos venimos refiriendo aquí, Guadalajara deberá estar ya recibiendo aportaciones importantes del caudal de la cuenca del Río Verde y tener a la vista, para subsecuentes etepas, las restantes fuentes de la región, entre las que se cuentan el Río Juchipila y los acuíferos del Río Ameca. La polémica entonces será sobre prioridades y costos, tanto directos —por captación y conducción—, como indirectos —al afectarse a la actividad agrícola del Valle de Ameca.

Con todo y todo, el agua no faltará en el mediano plazo, como tampoco habrán de faltar en general los demás servicios e infraestructuras, si bien, la atención a la demanda creciente continuará presentando fuertes rezagos mientras persistan las altas tasas de crecimiento demográfico, fenómeno que persistirá hasta bien entrado el Siglo XXI, pues aunque se logren las metas del Consejo Nacional de Población, de acercar al uno por ciento la tasa de crecimiento en el país hacia el año 2000, el componente migratorio de la tasa de crecimiento de las principales ciudades del país seguirá constituyendo una parte sustancial de la futura población. Por ello, la expectativa de una ciudad con cerca de seis millones de habitantes en el año 2000 no es un fatalismo sino una interpretación, más o menos objetiva, de las tendencias actuales.

Aceptemos aunque sea por un momento los razgos generales de la ciudad en tales términos, para ubicarnos ante los dos enfoques básicos que deberían adoptar, desde ahora, las autoridades a quienes corresponda tomar las decisiones relacionadas con el futuro de la ciudad, pues el dilema pareciera estar encerrado en el título de ese trabajo.

Tradicionalmente, y por razones obvias, se ha asociado el problema de la calidad de vida en la ciudad con el problema del tamaño de la misma. Todo parece demostrar que a mayor magnitud de la urbe, menor es la calidad general de la vida dentro de ella, pero como la afirmación no funciona igualmente si se la utiliza en sentido inverso, pues como dice el refrán "pueblo chico, infierno grande", tal vez sería más justo suponer la posibilidad de una mejoría gradual obtenida cuando un pueblo se desarrolla, y un proceso de declinación cuando se rebasa un determinado punto. El problema consistiría entonces en determinar previamente, en forma clara y objetiva, cuál es ese momento ideal para cada ciudad, lo cual, hasta la fecha, nadie ha podido hacer con éxito. Sin embargo, lo normal en estos casos es verse en el espejo ajeno, por eso, cuando observamos un fenómeno como el de la ciuad de México, nuestra reacción natural es tratar de impedir que la capital de Jalisco continúe creciendo indefinidamente, y esto nos obliga a asumir uno de esos enfoques básicos a que me refiero, y que no es otro que el de concentrar la tarea plnificadora y administrativa en el ordenamiento de la estructura urbana y en la calidad y operatividad de sus elementos componentes, procurando una armonía surgida de un modelo preconcebido —la ciudad como maqueta o como plano colorido—, con este enfoque, imposible de evitar totalmente, se observan posibilidades concretas para tratar de hacer y conservar amble la ciudad. Es un enfoque "hacia adentro", propiamente dicho.

Conforme a este enfoque, no serían tomados en consideración sino aquellos probelmas referentes a las funciones internas de la ciudad y los problemas de localidades de su periferia inmediata que por su cercanía y características se relacionen directamente con el funcionamiento interno de la misma. En contraste, el segundo enfoque obligado en el caso de Guadalajara, dadas su magnitud, ubicación estratégica e importancia regional, tomaría en consideración las funciones externas que la ciudad cumple o debería cumplir dentro del sistema regional y nacional de ciudades, esto es, conforme lo expresa A.M. Brasileiro, "El conjunto de actividades de carácter económico y social que son —o deberían ser— desempeñados por la metrópoli vis-a-vis los demás polos de desarrollo".[2]

Observada desde esta segunda perspectiva, la naturaleza del problema parece tener otras prioridades. Tomemos como ejemplo el sugerente argumento que manejan algunos industriales de la localidad, con el propósito de allegarse toda clase de estímulos oficiales preferenciales para su actividad económica. La tesis sustentada por estos promotores sigue más o menos la siguiente línea: el desarro-

llo de Jalisco no puede depender únicamente de la agricultura, el comercio y los servicios, es necesario un impulso firme a las actividades industriales, pero éstas a su vez, y dadas las condiciones actuales de nuestro desarrollo, demandan la conformación de un proceso integral de subcontratación que permita la incorporación amplia de la pequeña y mediana industria en todo el estado de Jalisco, y esto, finalmente, tan sólo es viable si se apoya en la consolidación de un centro industrial de la magnitud de Guadalajara, a partir del cual se desencadene la cascada de la subcontratación. Sin aprovechar las economías de escala de esta metrópoli el proceso no sería viable, aseguran.

Otro ejemplo interesante para este segundo enfoque de planeación lo encontramos en las políticas de desconcentración y descentralización que viene poniendo en práctica la Administración Pública Federal. Siendo ya una realidad contundente la profunda crisis a la que ha llegado la Ciudad de México —aún antes del devastador sismo de septiembre del año pasado—, la transferencia de recursos y atribuciones hacia el resto del país se ha convertido en una necesidad inaplazable, siendo, al mismo tiempo, una buena oportunidad para intentar balancear el desigual desarrollo que presentan actualmente las diversas regiones de la República Mexicana. Para ello, se procura evitar que el remedio resulte peor que la dolencia, por lo que se ha tenido el cuidado de tomar en consideración a ciudades pequeñas y medianas que pudieran servir de apoyo a esta estrategia, pero nuevamente aparecen los factores de escala, aglomeración y ubicación, entre otros, para señalar a Guadalajara —principal metrópoli regional del occidente de México— como un apoyo necesario, tanto para la desconcentración interna de las instituciones federales —reduciendo sus órganos centrales y reforzando sus órganos regionales— como para la descentralización de recursos y atribuciones hacia los gobiernos estatales. Esto, dentro de un proceso que haría posible, posteriormente y en forma progresiva, hacer lo propio desde las cabeceras estatales hacia centros subregionales cuidadosamente seleccionados, planificados, apoyados y controlados.

A lo largo de su historia, Guadalajara ha tenido siempre un predominio sobre la región y le ha correspondido cumplir con una amplia e importante gama de funciones que se pueden calificar como "externas",[3] que han contribuido en menor o mayor medida a dinamizar su crecimiento. Por ello, sin renunciar a la necesidad de planificar y regular el desarrollo urbano, es claro que estas funciones no van a ser canceladas por decreto de autoridad, ni pueden ser cándidamente ignoradas por los defensores del "no crecimiento". De acuerdo con este segundo enfoque deberá considerarse la ciudad "hacia afuera", entendiendo y valorando la importancia de sus funciones regionales y la relación que estas deban guardar con las líneas generales del desarrollo nacional.

De aquí surgen los términos del dilema, que a unos parecerá real y a otros aparente: crecimiento urbano y calidad de vida: ciudad amable y metrópoli regional.

Paradójico o no, el hecho real y concreto es que el crecimiento urbano conlleva costos asociados. La concentración de personas y de sus sistemas de producción, de consumo y de convivencia, generan alteraciones negativas en el ambiente que ninguna sociedad ha logrado eliminar totalmente, además de que en el subdesarrollo económico la pobreza es también más evidente en las ciudades. Ante esta realidad, el planificador parece obligado a elegir entre una de tres posibles posturas:

— Enarbolar la bandera de la utopía, agregándose al selecto club encabezado por Platón y Tomás Moro, para proponer esquemas urbanos formales o comportamientos sociales y económicos ideales pero sin vinculación efectiva con nuestra realidad.

— Adoptar la postura, por muchos satanizada, del "incrementalismo" postulado por Charles E. Lindblom,[4] tesis que, contrariamente al racionalismo utópico, no aspira a la comprensión global de los problemas, ni a la valoración objetiva y científica de todas las alternativas posibles de solución, ni a la solución integral de problemas, ni a la valoración objetiva y científica de todas las alternativas posibles de solución, ni a la solución integral de problemas cuya complejidad involucra incontables variables sociales, económicas y ambientales; pretende, más bien, identificar problemas clave, que demandan cambios limitados de rumbo de las políticas en curso y adoptar estrategias adecuadas a los limitados conocimientos de los que toman

las decisiones, reduciendo el costo de la obtención y procesamiento de información.

– La tercera opción del planificador será, finalmente, buscar alguna postura intermedia, ni tan revolucionaria ni tan conservadora, que le permita moverse dentro del terreno de lo factible sin tener por ello que renunciar a los dictados de su conciencia.

Todo indica que Guadalajara continuará creciendo durante las décadas por venir, lo que permitirá a varios millones de mexicanos, tener una opción para el desarrollo personal, tanto en el bienestar físico, como en la superación cultural y en el mejoramiento económico, pero esto conllevará, inevitablemente, costos adicionales. Aumentará la polución del ambiente, se alterará aún más el microclima urbano, se gastarán más horas en los desplazamientos dentro de la ciudad, cambiarán hábitos y costumbres tradicionales, se hará más complejo y diversificado el mosaico social –con pobladores provenientes de otras regiones del país–, además de que, cíclicamente, de acuerdo con los vaivenes de la economía, se encarecerán algunos satisfactores básicos como la vivienda o el transporte. Pero todo esto, por inevitable que sea, podrá ser mayor o menor según sea la calidad de las decisiones que en lo futuro se tomen. Si Guadalajara no es una ciudad amable para el año 2000, no será porque tenga seis millones de habitantes en vez de cinco, ni tampoco por que el CONACYT o la CONASUPO se muden para acá con todo y escritorios en vez de mandarlos a Ciudad Guzmán o a Lagos de Moreno. El problema no será tanto de magnitudes como de actitudes. El reto de los planificadores será, con argumentos convincentes y estrategias viables, lograr cambiar actitudes de ciudadanos y de autoridades.

Controlar el mercado del suelo para vivienda popular; controlar la implantación ordenada y la operación no contaminante de la planta industrial; administrar los servicios urbanos entendiendo a la ciudad como un solo conjunto urbano en vez de una simple suma de parcelas de poder político, de discutible autonomía e inalcanzable autosuficien-

cia; preservar el patrimonio histórico arquitectónico que aún nos queda; asegurar el óptimo aprovechamiento de la infraestructura vial con eficientes sistemas de administración del tránsito y, en fin, evitar que el caos se apodere del espacio urbano, son, todos, propósitos con evidente factibilidad técnica y económica. El problema no radica ahí. La dificultad no estriba en hacer un claro planteamiento económico, financiero, técnico y legal para llevar a cabo un amplio programa de dotación de lotes para la vivienda popular, que sea no sólo vialbe sino, inclusive, rentable; como tampoco es problema técnico o económico la creación de un sistema metropolitano para la captación de toda la basura generada en la ciudad y su correcta disposición final desde el punto de vista ecológico. En estos ejemplos, como en la mayoría de los problemas que genera el crecimiento de la metrópoli, la verdadera dificultad será lograr un cambio de actitudes entre aquellos que ejercen el poder, tanto el político como el económico, para que acepte cada quien hacer su propio juego sin sacudirse la responsabilidad social que le corresponde. No se trata de seguir a ciegas los designios del planificador, pero tampoco de cerrar los ojos, por conveniencia, ante las demandas sociales.

El problema del planificador para hacer amable una ciudad de seis millones de habitantes no es el de acertar con el proyecto de estructura urbana ideal o con los diseños adecuados para las crecientes redes de infraestructura. Para ello sobra teoría y abunda la técnica, su problema será lograr la implementación y puesta en práctica de un proceso activo de planeación que garantice la participación de la sociedad civil y comprometa la actuación concertada de las instituciones del gobierno municipal, estatal y federal que tienen competencias para actuar sobre los problemas del desarrollo urbano de nuestra metrópoli, para reducir, al mínimo posible, la irresponsabilidad, la prepotencia o la simple y costosa ingenuidad.

NOTAS

1) Según Alfredo Medina Guerra, en "Algunos apuntes sobre vialidad y tránsito". Revista CEPES Jalisco. Enero-marzo, 1984.
2) A.M. Brasileiro: "Región Metropolitana del Gran Río; servicios de interés común". Instituto de Planeamiento Económico y Social. Brasil, 1976.
3) Véanse, para este tema, los valiosos estudios de funciones urbanas realizados por la antigua Junta General de Planeación y Urbanización del Estado (1976), bajo la dirección del Ing. J. Manuel Arreguín, con el trabajo de los Arqs. Mario y Cecilia Martí y un grupo de profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura del ITESO.
4) Charles E. Lindblom. "The Science of Muddling Trough". Public Administration Review, Vol. 19 (1959) pp. 79-99.